



35ª edición de la publicación anual de la CPT revela el mayor número de conflictos en el campo, de ocurrencias de conflictos por tierra, de invasiones de territorios y de asesinatos en conflictos por agua ya registrados

Desde inicio de 2020, acompañamos la trágica crisis mundial sanitaria, particularmente cruel en Brasil por el proyecto político que tenemos.

Los datos generales de conflictos en el campo muestran que los registros pasaron de 1.903 casos en 2019, para 2.054 en 2020, con aumento del 8%. **Es el mayor número de ocurrencias de conflictos en campo que la CPT registró hasta ahora, desde 1985.** El número de personas involucradas pasó de 898.635, en 2019, para 914.144, en 2020, un aumento de casi 2%.

La CPT documentó y sistematizó, también, 1.576 ocurrencias de conflictos por tierra en 2020, la mayor cantidad desde 1985, cuando el informe empezó a ser publicado, una cifra 25% superior a 2019 y 57,6% a 2018. Conflictos donde estuvieron involucradas 171.625 familias. Cantidad que todavía es más asustadora cuando analizados apenas los números referentes a los pueblos indígenas de Brasil en este tipo de conflicto: 656 ocurrencias (41,6% del total), con 96.931 familias (56,5%).

Esta mayor cantidad de ocurrencias de conflictos por tierra se registraron en 2020 y después en 2019, por tanto, en los dos años de gobierno de Jair Bolsonaro. En tercer lugar, está el año 2016, año del golpe que tiró Dilma Rousseff de la presidencia, para instituir Michel Temer. Fue e esta coyuntura política desastrosa de los últimos años que aumentó la violencia en el campo.

Es importante destacar que la CPT sistematiza “ocurrencias”, es decir, hechos de violencias documentadas en determinado momento histórico: Habiendo en muchos casos conflictos que se mantienen a lo largo del tiempo, a veces por años o, incluso, por décadas, sobre todo cuando se trata de poblaciones tradicionales.

En el caso de familias que tuvieron sus territorios invadidos, hubo aumento porcentual de 102,85% de 2019 para 2020. **81.225 familias tuvieron sus tierras y territorios invadidos en 2020. Estamos delante de la mayor cantidad de este tipo de violencia que ya registró la CPT.** 58.327 de estas familias son de indígenas, o sea, 71,8%.

Conflictos por Agua: record de asesinatos

En 2020, el número de ocurrencias de conflictos por agua fue menor en 30% con relación al año anterior. En el cual hubo dos hechos de gran magnitud e de grande impacto en los conflictos de 2019: El derrame de óleo del litoral brasileiro, especialmente en la Región Nordeste, y el desastre de la ruptura de la presa B1 de la empresa minera Vale S.A, en Brumadinho (MG).

Pero se registraron cuatro asesinatos en este tipo de conflicto, el mayor número de muertes que se dieron en conflictos por agua que ya registró la CPT, desde que empezó a hacer este registro separado de los “conflictos por tierra”, en 2002. Cuatro asesinatos ocurridos en lo que se ha conocido como Masacre del Rio Abacaxis. En agosto de 2020, Josimar Moraes Lopes, indígena Munduruku, y 3 ribeños fueron asesinados en la región del río Abacaxis. Un segundo indígena, primo de Josimar, consta como desaparecido. Hubo también el asesinato de dos policías militares y de un presunto traficante. Agentes de la CPT Amazonas relataron que se trata de una situación compleja, que envuelve campesinos e indígenas, de un lado, pescadores ilegales y policías do otro, y todavía un tercero grupo formado por traficantes de drogas. Segundo el Ministerio Público Federal (MPF), desde el año 2007 los indígenas denuncian el estallido de conflictos en la región, causados por el turismo de pesca deportiva, la minería irregular, el tráfico de drogas y el uso de armas de fuego. En este contexto, las comunidades locales continuamente sufren amenazas.

Conflictos Laborales: la pandemia agravó la vulnerabilidad de los trabajadores y trabajadoras

En 2020 se registraron 96 ocurrencias de conflictos laborales, número casi 7% mayor que en 2019, que se registraron 90. **Se trata del mayor número de los últimos seis años.** En 2020 estos conflictos afectaron un 25% a más de trabajadores y trabajadoras que en las denuncias del año anterior. Fueron 1.104, mientras que en 2019 fueron 883. Cada año, desde 2015, crece el número de pobres e, contradictoriamente, baja el número de personas beneficiadas por el programa Bolsa Familia, o otros programas de asistencia social. Realidad que empeoró con la pandemia de Covid-19.

Thiago Muniz, fiscal laboral, analiza en un texto publicado en este informe, que “a partir de 2016, por lo contrario, todo empeoró. El golpe de estado parlamentario ha sido un nítido marco, un verdadero separador de aguas en el enfrentamiento al trabajo esclavo contemporáneo: a partir de entonces, la desigualdad aumenta, los asentamientos de reforma agraria se reducen, el autoritarismo renace, la protección socio laboral se evapora y las políticas de enfrentamiento son paulatinamente corroídas”. Sumamos a todo esto, la realidad pandémica de falta de asistencia a los trabajadores y a los pobres, tanto de las ciudades como del campo, aumentando, así la vulnerabilidad de aquellas personas que acaban, por falta de perspectivas, siendo seducidas por esta práctica criminal.

Asesinatos, tentativas e invasiones: violencia contra Indígenas y contra sus territorios

Durante 2020, entre los 18 asesinatos registrados por la Comisión Pastoral de la Tierra (CPT), en el contexto de los conflictos del campo, **siete eran de indígenas, 39% de las víctimas.** Entre las 35 personas que sufrieron intentos de asesinato o de homicidio, **12 también eran indígenas, 34% de las víctimas.** Y de las amenazas de muerte, entre las 159 personas amenazadas, **25 eran indígenas, 16% de las víctimas.**

Estos datos revelan, de acuerdo con la análisis que está en la publicación de la CPT hecha por el coordinador jurídico de la Articulación de los Pueblos Indígenas del Brasil (APIB) y de la Coordinación de las Organizaciones Indígenas de la Amazonía Brasileira (COIAB), Eloy Terena, que los líderes indígenas están a merced de una violencia engendrada a partir de la postura gubernamental que incentiva las invasiones y la exploración de los territorios. Hay por lo menos 246 tierras indígenas (TI) que todavía están pendientes de homologación. En 2020, como destaca Eloy Terena, casi 800 km² de floresta que fueron tumbados, apenas en los tres primeros meses del año, es decir, un aumento de 51% en relación al mismo período de 2019. Un tercio de la devastación fue en tierras públicas, objetivo preferencial de los “grileiros” (acaparadores ilegales de tierras). Cabe destacar que, además de los problemas estructurales causados por la falta de demarcación de tierras indígenas y por la ausencia de protección de las demarcadas, los pueblos y comunidades indígenas están devastadas por el avance de la pandemia da COVID-19 en todas las regiones del país.

Los registros de la CPT dimensionan la gravedad del ataque contra los territorios originarios que estamos viviendo, especialmente a partir de 2019. **Tengamos en cuenta que algunos modos de violencia, como la “invasión”¹, sufrieron un crecimiento exponencial.** Así, durante 2020, de 81.225 familias víctimas de invasiones, 58.327 son indígenas, 71,8%. En 2019, el porcentaje era de 66,5% (26.621) y en el año 2018, 50,1% (14.757). Si consideramos apenas el incremento de familias indígenas impactadas, entre 2018 y 2020, el porcentaje dispara en 295%. En relación a la “grilagem” (acaparamiento), 2020 es un año igualmente superlativo, con 7.252 familias indígenas afectadas, de un total de 19.489 (37,2%), en profundo contraste con dos años anteriores, en los cuales los indígenas suman 1.381 del total de 15.037 familias, un 9,2%.

El COVID-19 avanza sobre el campo brasileiro

Si la gestión de la pandemia fue mala en las zonas urbanas, que tienen una infraestructura mínima de servicios para mantener la salud y la vida, en el campo la situación se agravó mucho más, impactando la dinámica de los conflictos socio territoriales. **Se registraron, en 2020, 316 ocurrencias relacionadas a COVID-19, involucrando 79.038 familias. Sumadas a los casos de conflictos por tierra, tenemos registro de 1.892 ocurrencias y 250.663 familias en conflictos por tierra y en situación de contagio de COVID en Brasil.** Viendo los datos de ocurrencias históricas de conflictos y los datos que incluyendo hechos relacionados al COVID-19, observamos que el mayor número de afectados por el nuevo coronavirus se registra en regiones, estados y municipios ya estaban impactados por los conflictos del campo. Con

¹ Invasão - Entrada ilegal em territórios/comunidades para usufruir indevidamente dos bens necessários aos modos de produção e reprodução da vida dos povos. A invasão costuma vir acompanhada de desmatamento ilegal, grilagem (expansão de cercas), pistolagem, expulsão, ameaça de expulsão, colocação de marcos ilegais para pesquisa minerária, sem consulta prévia, livre e informada aos povos; colocação ilegal de cercas para impedir acesso às fontes de água, entrada no território para pesca predatória, solta de gado no território, retirada de cercas etc.

aumento del número de ocurrencias en los estados de Amazonas, Roraima, Acre, Pará, Mato Grosso y Mato Grosso do Sul. Situación que se expresa, también, en el número de familias en conflictos y casos de COVID-19. **El impacto se muestra especialmente destructivo e las comunidades tradicionales, como indígenas y “quilombolas” (afrodescendientes).** Segundo la Articulación de los Pueblos Indígenas del Brasil (Apib), hasta 15 de abril de 2021, 52.406 indígenas de 163 identidades diferentes habían sido infectados por el nuevo coronavirus, con 1.038 óbitos. Si en el contexto general, las muertes provocadas por el COVID-19 se intensificaron por el gobierno Bolsonaro, entre los pueblos originarios este hecho fue mucho más amplio y cruel.

La pandemia también mostró la situación de abandono de las poblaciones afrodescendientes y reveló la completa ausencia de políticas públicas destinadas a protegerlas durante esta grave crisis sanitaria. **De acuerdo con la Coordinación Nacional de Articulación de las Comunidades Negras Rurales Quilombolas (Conaq), en 24 de noviembre de 2020, había 4.646 casos confirmados, con 169 óbitos.** El Pará fue el estado más impactado con 79 muertes, o sea, 29,3% del total.

Barreras sanitarias

Como medida de resistencia y protección, comunidades y territorios tradicionales montaron barreras sanitarias, para intentar impedir la entrada del virus y la contaminación de las familias. Frente a la ausencia de un plano nacional de contención de la contaminación por Covid-19, o de medidas específicas para resguardar la gente del campo, de las aguas y florestas, esta medida fue necesaria para asegurar salud y seguridad en áreas rurales. **Durante el año de 2020, 234 comunidades y territorios tradicionales establecieron barreras sanitarias. Los indígenas realizaron más barreras. 184 territorios indígenas adoptaron esta medida de protección.** Donde más barreras sanitarias se montaron fue en la región Centro-Oeste, en 86 áreas, abarcando 18.782 familias. Casi un tercio del total de barreras. Seguida por la región Norte, con 69 barreras para resguardar 27.760 familias.

Mujeres no campo: La violencia patronal del campo es blanca y misógina

Durante los últimos diez años (2011-2020), la CPT registró 77 intentos y 37 asesinatos de mujeres en contexto de conflictos agrarios y socio ambientales. Eran trabajadoras rurales sin tierra, afrodescendientes e indígenas, en su mayoría. Estos episodios estuvieron concentrados, sobretudo, en la Región Norte del país, con 24 asesinatos y 40 intentos. En seguida, están las regiones Nordeste e Centro-Oeste, con 5 asesinatos cada y, en el caso de los intentos, hubo 26 en el Nordeste y 6 en el Centro-Oeste. En el Sudeste/Sul, fueron registrados, respectivamente, 2 / 1 asesinatos y 3 / 2 tentativas. Además de los asesinatos consumados y de los intentos, la CPT registró también un conjunto bastante amplio de violencias contra las mujeres: agresiones, amenazas de muerte, detenciones, violaciones lesiones corporales, humillaciones, intimidaciones y prisiones.

En diez años, 446 mujeres fueron amenazadas de muerte, mujeres ocupantes de tierra (90), afrodescendientes (60) y trabajadoras sin-tierra (49) reuniendo el mayor contingente de amenazadas. Fueron 37 violaciones durante esta década, siendo la principales víctimas mujeres afrodescendientes y originarias. Treinta de las cuales niñas y adolescentes violentadas de la comunidad afrodescendiente Kalunga, del estado de Goiás. Los involucrados en estas violaciones hacendados, mineros, miembros del Poder Legislativo municipal, y empresarios. Noventa y ocho mujeres presas en los últimos diez años en el contexto de los conflictos en el campo, aguas y florestas. Prisiones, sobretudo, para mujeres sin-tierra (66 del total), lo que sugiere la permanencia de engranajes punitivos en el tratamiento de las luchas por reforma agraria y derechos territoriales en Brasil. Las violaciones practicadas contra las mujeres en contextos de conflictos socioambientales y territoriales, son un factor que merece atención. Violencia sexual contra mujeres constituyen históricamente formas de control patronal. Para la profesora de Derecho de la Universidad Federal de Bahía (UFBA) y asesora jurídica popular Tatiana Emilia Dias Gomes, considerando que las víctimas de la última década fueron mujeres de los pueblos originarios y niñas y adolescentes afrodescendientes, la persistencia del mito de la democracia racial constituye un elemento para análisis, pues este mito contribuye para pensar que el proceso de mestizaje resultó de contactos cordiales entre las tres razas, ocultando que mujeres negras y de los pueblos originarios suportaran las consecuencias sexuales de este proceso en sus cuerpos y que no hubo posibilidades igualitarias de existencia para las tres razas.

La lucha contra la lgbtifobia en el campo

Por otro lado, Brasil es el país que lidera los números de asesinatos relacionados a LGBTfobia en el mundo. Las violencias LGBTfóbicas no están tan distantes de las organizaciones campesinas y de la vida del campo. En 19 de agosto 2019, Aline da Silva, militante trans del Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin-Tierra (MST), fue degollada por dos desconocidos a la salida de una fiesta en el municipio de Arcoverde, en Pernambuco. El día 5 de junio de 2020, Safira Nunes, mujer trans militante del Movimiento de los Pequeños Agricultores (MPA), sufrió agresión transfóbica en el municipio de Cedro, también en Pernambuco. A inicios de este año, el 26 de enero de 2021, en el municipio de Pau D'Arco, del Estado de Pará, Fernando dos Santos Araújo, gay sin-tierra, fue bárbaramente ejecutado. Era testigo y uno de los sobrevivientes del Masacre de Pau D'Arco, que mató diez sin-tierra en 24 de mayo de 2017. En estas situaciones de violencia LGBTfóbica, confluyen y se reproducen también las violencias del latifundio, de la represión y criminalización de los y de las trabajadores/as del campo, del hambre y de la pobreza por la inexistencia de Reforma Agraria, de la invisibilidad y el cometidas contra niñas y adolescentes en las propias comunidades campesinas.

Más informaciones:

Cristiane Passos (Asesoría de Comunicación CPT Nacional) - (62) 99307-4305

Mário Manzi (Asesoría de Comunicación CPT Nacional) - (62) 99252-7437

Amanda Costa (Asesoría de Comunicación CPT Nacional) - (62) 99309-6781